

mer Suplente de Distrito: damos fé.—*P. Mendizábal Ortiz.*—De asistencia.—*José M^{te} Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Es copia de sus originales, que certifico. Hércules Veracruz, Enero 29 de 1875.—*P. Mendizábal Ortiz.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 17 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Veracruz, por el C. Joaquín Gerónimo Solano, contra el Juez de 1^a Instancia de Jalapa, que lo redujo á prision y lo consignó á la autoridad política del Canton, para que lo remitiera al Tribunal de 1^a Instancia del mismo lugar, con motivo de la causa que se le instruye por el delito de abuso de confianza, con cuyo acto juzga el quejoso violadas en su persona las garantías que otorgan los arts. 16 y 19 de la Constitucion general. Vista la sentencia del Juez de Distrito que amparó al quejoso y las demás constancias que obran en autos, se decreta: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia que pronunció el Juez de Distrito de Veracruz en 18 de Enero del presente año.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole copia de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron—*José María Iglesias.*—*Ignacio Ramirez.*—*E. Montes.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 12 de 1875.—*Enrique Landa*,

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan, por los CC. Martín Torcida y otros, contra el Administrador de Rentas de Morelia, que les exige el pago de contribuciones, por los sueldos que tienen asignados como empleados federales.

Pedimento del C. Promotor Fiscal.

C. Juez de Distrito:

Varios empleados de la Federacion residentes en esta ciudad, ocurrieron al Juzgado del digno cargo de vd., en 16 de Diciembre próximo pasado, exponiendo: que el C. Administrador Principal de Rentas de esta capital les exigia con apremio, el pago de la contribucion personal decretada en 31 de Julio de 1872, y en 2 de Agosto del año que acaba de concluir: que como esta contribucion grava directamente los sueldos que tienen asignados por la ley general de presupuestos, creen los quejosos que se ha invadido de esta manera una de las atribuciones cometidas al Congreso de la Union en la parte 11^a del artículo 72 de la Constitucion General; y que los procedimientos para exigirse el cobro, violan las garantías de los artículos 4^o y 5^o en su primera parte; 17, 22 y 27 de la misma. En esta virtud y fundados en las fracciones 1^a y 3^a de la ley de 20 de Enero de 1869, pedian el amparo de la Justicia federal.

El ciudadano Administrador de Rentas se propone demostrar en su difuso informe, que los decretos de que se trata, no violan en manera alguna las garantías consignadas por los quejosos: que la Legislatura del Estado ha podido darlos con plenas facultades constitucionales; y que no ha habido apremio al exigir la contribucion correspondiente al año fiscal anterior y á la parte del que va corriendo. Entra á propósito en algunas consideraciones, cuando examina cada una de las garantías que se creen violadas; pero el valor que tengan dichas consi-

deraciones, se palpa al fijar la verdadera inteligencia y aplicación de los artículos constitucionales.

El que suscribe ha tenido siempre una opinion contraria á la del ciudadano Administrador de Rentas, y aun cuando el sueldo que disfruta como Promotor se halla tambien gravado con el impuesto de que se trata, no por esto dejará de buscar los fundamentos del pedimento fiscal, en otra parte que no sea en la misma Constitucion de 1857.

Antes de entrar en materia, es preciso fijar ciertos precedentes.

El decreto de 31 de Julio de 1872, dice en su artículo 1º: "Se impone una contribucion de cinco mil pesos mensuales, que será cubierta por todos los habitantes del Estado, que tengan giro mercantil, establecimiento industrial, profesion, ejercicio, capital, renta, sueldo, salario y en general cualquiera operacion que produzca anualmente más de cien pesos. Se exceptúan el capital que consista en fincas rústicas ó urbanas y sus productos." Los demas artículos que establecen las bases del impuesto, y fijan la manera de su recaudacion, la cual queda á cargo de los Administradores de rentas para aplicar sus productos al fondo general del Estado. Este decreto comenzó á tener su cumplimiento en 1º de Setiembre del mismo año de 72; debiendo advertirse que, el importe de la contribucion, debia distribuirse anualmente por municipalidades.

El decreto de 2 de Agosto del año próximo pasado, establece en su artículo 1º el mismo impuesto de que se trata, sugetando su recaudacion á las prescripciones de la ley anterior, consigna sus productos á los fondos municipales y establece ciertas condiciones para su mejor cumplimiento. Desde luego se comprende que, la contribucion decretada, ha sido materia de dos Decretos diversos, porque aun cuando sea uno el impuesto, su aplicación es distinta; y por el segundo se imponen las condiciones de que en él se hablan. En virtud del primero, se

exige á los empleados federales la contribucion que corresponde á su sueldo, desde la fecha que señaló su reglamento; y por el segundo, se cobra lo que corresponde á los meses corridos desde Setiembre á la fecha.

Con estos antecedentes, se puede entrar ya al exámen de cada una de las cuestiones que se presentan, debiendo resolverse como principal, si estos decretos por lo que toca al gravámen que impone á los sueldos de los empleados federales, invaden ó no las atribuciones del Congreso de la Union en la 11ª fraccion del artículo 72 constitucional. Esta dice expresamente, que solo el Congreso tiene facultades, *para crear y suprimir empleos públicos de la federacion; señalar, aumentar ó disminuir sus dotaciones.* Esto supuesto, importa saber si el impuesto de que se trata, disminuye ó no el sueldo que por la ley general disfrutaban los empleados de la federacion, que presentan este escrito. Cualquiera comprende que, siendo fijo y determinado el sueldo de los empleados de quienes se trata, y que la ley estimó como la justa retribucion de su trabajo, todo impuesto que grave directamente este sueldo, importa consiguientemente una disminucion del mismo. Será ésta más ó menos; pero en la cuestion de principios, nada importa, para dejar de calificar como una invasion á la facultad otorgada al Congreso general por la fraccion citada, toda vez que solo ella corresponde al mismo Congreso. Esta es la verdadera inteligencia que se desprende del artículo constitucional, y que se ha precisado por varias ejecutorias de la Suprema Corte, como puede verse entre otras la de 27 de Febrero de 1873, con motivo de un juicio de amparo exactamente igual al presente y que se registra en el tomo 3º del «Semanario Judicial» de fojas 765 á 770. Como fundamento principal se consigna que, los *Gobiernos* de los Estados, no tienen facultad para imponer contribuciones que graven directamente los sueldos de los empleados de la federacion. Como se ve, los decretos en cuestion adolecen de este vicio en la par-

te que se quiera aplicar á los sueldos de los empleados federales, y esto solo basta para que se les otorgue el amparo que tienen pedido. Pero además, la razón de ser del artículo 120 de la Constitución, comprende el caso presente. Dice el artículo citado lo que sigue: «El Presidente de la República, los individuos de la Suprema Corte de Justicia, los Diputados y demás funcionarios públicos de la Federación, de nombramiento popular, recibirán una compensación por sus servicios, que será determinada por la ley, y pagada por el tesoro federal. Esta compensación no es renunciable, y la ley que la aumenta y disminuya, no podrá tener efecto durante el período en que un funcionario ejerza el cargo.» La razón de este artículo se funda precisamente en la necesidad que hay de que todo empleado se consagre única y exclusivamente al exacto cumplimiento de los deberes que demanda el servicio público. Si pues, al sueldo que se les ha señalado como la justa retribución de su trabajo, se le impone un gravámen, es evidente que se destruye la compensación establecida por la ley en beneficio público, porque de esta manera se le quita al mejor servicio de la Administración, la garantía que la ley le ha dado. Estos considerandos que pueden verse en la historia del Congreso constituyente y en el derecho constitucional del Sr. Castillo Velasco, son enteramente aplicables á todos los empleos, cuya dotación corresponde al mismo poder que los crea. Ya se dijo antes que, para cuestión de principios nada importa que venga á ser insignificante la disminución ocasionada por el impuesto. Como se descubre ya el valor que puedan tener la reflexiónes que á este respecto se hacen en el informe del ciudadano Administrador de Rentas, no hay para que ocuparse de ellas, supuesto que no pueden servir de base para fijar la inteligencia de la ley.

Viniendo ahora á la aplicación de la primera parte del artículo 4º de la Constitución, se palpa que la libertad para aprovecharse los quejosos del producto de su tra-

bajo, se halla limitada por los decretos de que se habla, supuesto que se disminuyen aquellos con el impuesto en cuestión. La misma Suprema Corte en la ejecutoria citada, consigna esta inteligencia, que á su vez le sirve de fundamento. Es fuera de duda que al exigirse á los quejosos los impuestos sobre sus sueldos, se comete una violación de la garantía citada.

No será por demás contestar la observación que hace el ciudadano Administrador de Rentas al ocuparse de este punto. Dice al efecto, que como toda contribución importa siempre el menoscabo de las utilidades que produce todo trabajo útil y honesto, es imposible decretar contribuciones de ningún género; ya sea que afecten los intereses industriales, los de la agricultura ó el comercio. Pone en seguida algunos ejemplos para demostrar que, tanto el agricultor como los que se dedican á los diversos ramos de industria y de comercio, sufren al pagar los impuestos, el menoscabo de las utilidades provenientes del capital, que siempre se halla asociado al trabajo. Sin duda se quiso así demostrar la proposición asentada antes, sobre que no podía decretarse contribución alguna, bajo la inteligencia que dan los quejosos á esta garantía que se invoca.

Esta argumentación queda destruida por su base, considerando tan solamente la diferencia de relación que hay entre el trabajo aplicado á la industria, á la agricultura ó otro giro mercantil, y la que hay cuando se aplica el mismo á las labores encomendadas á cualesquier empleados del servicio público.

En el primer caso, las utilidades del trabajo podrán ser mayores ó menores, atentas las muchas circunstancias que para ello influyen. Sobre este punto no cabe regla posible para fijar con precisión el final resultado, y por eso al tratarse de las contribuciones, hay que basar estas sobre un cálculo de productos tomados las mas veces de un tiempo que arbitrariamente se determina.

En el segundo caso, esto es, en la relacion del trabajo con los servicios del empleado, no cabe ese aumento ó disminucion antes dicho, porque siendo determinados los trabajos que se encomiendan á cada uno de los dependientes de la administracion pública, la misma ley que ha creado los empleos en el orden que conviene al régimen administrativo, ha podido muy bien fijar una utilidad determinada. Si pues, en el caso de que se trata se quiere disminuir con el impuesto en cuestion, el sueldo que por la ley disfruta cada uno de los empleados que suscriben el anterior curso, es de todo punto fuera de duda que se ataca la garantía consignada en la primera parte del artículo 4º constitucional.

Quizá, por un excesivo celo del ciudadano Administrador, se habrá aventurado á dar á la parte del artículo citado una inteligencia que realmente no tiene.

No es ménos patente esta violacion al tratarse de la garantía de que habla la primera parte del artículo 5º citado. En efecto, desde que el impuesto importe una disminucion del sueldo, se obliga á prestar un trabajo personal sin la justa retribucion. Esto es tan claro, que no necesita esplicaciones, y basta solo tener en cuenta que, al fijar la ley el sueldo del empleado, lo hace en consideracion al trabajo que la misma ha establecido, y tiene por lo tanto como base la justa indemnizacion.

A este propósito dice el Sr. Administrador, es que torcida la inteligencia que se dá á esta parte del artículo, porque aun cuando el impuesto disminuye el sueldo, no viene á absorverlo cada mes, obligándose sin embargo al empleado á continuar en el desempeño de su encargo. Asegura que el comerciante, el agricultor y el industrial toman de los productos de su trabajo las cantidades que necesitan para pagar los impuestos, y que á nadie le ha ocurrido decir que este menoscabo convirtiera en gratuito el trabajo personal.

Perfectamente son adecuadas á este caso

las mismas observaciones que se hicieron respecto del anterior.

Notada ya la diferencia que hay entre el trabajo aplicado al comercio, la agricultura y la industria, y el que se impende en el servicio de la Administracion, se comprende, que respecto del 1º no cabe regla posible, y por lo mismo no puede consignarse como un principio, cuales son las utilidades que constituyan la justa indemnizacion. Por lo mismo, no es esta el punto á que debe aplicarse la fraccion constitucional.

Tratándose de los servicios del empleado, la misma ley que los ha reglamentado, ha podido fijar con todos los datos necesarios esa justa indemnizacion, cuyo aumento ó disminucion, no puede estar sujeto á cualquier eventualidad. Importando todo impuesto sobre sueldos, una verdadera disminucion, deja el empleado de percibir lo que la ley le ha señalado como la justa retribucion de sus servicios, cuya calificacion no corresponde á poder extraño, y por lo mismo, la ley dada por éste en el sentido dicho, viola sin remedio alguno la fraccion del artículo de que se trata.

En estas circunstancias se encuentran los decretos del Estado, siempre que se trate de aplicar á los sueldos federales, el impuesto de que se habla.

Antes de pasar á otro punto, conviene observar que si los empleados federales tienen que comprar el papel sellado para sus despachos, no por esto pierden una parte de su sueldo como dice el Sr. Administrador, para inferir de aquí, que no debía hacerse este gasto tampoco, dándose á los artículos constitucionales la inteligencia que le dan los quejosos. Basta simplemente reflexionar, que conforme á la ley, no pueden considerarse como empleados federales sino los que tienen nombramiento legítimo y un despacho en el papel del sello correspondiente. Llenadas estas condiciones, y en ejercicio del encargo que se encomienda, se tiene ya derecho al sueldo, y se comprende desde luego que, en el sentido de la ley, y aun

estrictamente hablando no ha podido salir de este el gasto necesario para el papel del despacho, que es, el que dá derecho al sueldo como se dijo antes.

Por lo que toca á la garantía del art. 27, se encuentra también violada en este caso, porque si el fruto del trabajo que aquí es el sueldo, viene á formar parte de la propiedad particular, no puede ser esta atacada en manera alguna, contra el precepto constitucional. Las reflexiones que antes se han hecho, vienen á confirmar la aplicación que para este caso especial hacen los quejosos, y por lo mismo son inconducen-tes las observaciones generales hechas por el C. Administrador.

En cuanto á la violación del art. 17 que se funda en la aplicación del segundo decreto, se nota desde luego que, mientras no se pague dicho impuesto, no puede el empleado federal reclamar su derecho, y esta es precisamente la violencia que en su contra se ejerce, á la vez que se impone cierta traba á la administración de justicia. Como estos son los puntos que se violan del art. citado, no hay para que entrar en otros pormenores extraños á la cuestión.

Por lo que mira al art. 22 constitucional, no encuentra fundada el que suscribe su aplicación, supuesto que él se refiere á negocios puramente criminales.

Respecto de la circular del Ministerio de Hacienda por la que se resuelve que los empleados federales están obligados á esta clase de impuestos, y cuya circular se inserta en el informe del C. Administrador, baste decir como él mismo lo asegura, que no decide la cuestión. En efecto, si conforme al art. 126 de la Constitución general, ella es la ley Suprema de toda la Unión, y los jefes de cada Estado deben acatarla, á pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones ó leyes de los Estados, es evidente, que no puede aplicarse la circular que se cita, supuesto que los mismos artículos constitucionales favorecen á los quejosos. La ejecutoria de

TOMO VII—PARTE II.

la Suprema Corte que se ha citado, y otras varias que se registran en el foro, confirman plenamente lo expuesto.

La frac. 2ª del art. 31 de la sección 2ª constitucional, enumera entre las obligaciones de todo mexicano, la de contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El argumento que se pretende fundar en esta parte, deja de tener todo su valor, desde que se considera el sueldo del empleado, como especial é inmediatamente destinado para la subsistencia del hombre, en cuyo caso debe estar libre de toda contribución. Por otra parte, el impuesto que disminuye el sueldo, podría convertirse en un medio indirecto de impedir el libre ejercicio de un trabajo honesto, contra el expreso tenor del art. 4º de la misma Constitución.

Examinado ya el caso presente conforme á los principios constitucionales que le son aplicables, y visto el valor legal que tengan las observaciones hechas por el C. Administrador, el Promotor, fundado en los artículos que se han citado de la Constitución de 57, y en el 1º y 3º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, pide: que la Justicia de la Unión ampare y proteja á los empleados federales que han interpuesto este recurso, contra los actos del C. Administrador de rentas que les exige el impuesto sobre sueldos, decretado en 31 de Julio de 1872 y 2 de Agosto de 1874, por la legislatura del Estado.

Morelia, Enero 4 de 1874.—N. Caballero.

Es copia que certifico. Morelia, Febrero 22 de 1874.—Isidro Aleman, secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Morelia, Febrero 16 de 1875.

Visto este juicio de amparo intentado por los CC. Martín Tórcida, Jefe de Hacienda

da del Estado, Agustin G. Real, Luis García de Leon y Ladislao López Aguado, empleados de la Jefatura, Franco Luna, Ladislao Ojeda y Jesus O. Izquierdo, empleados de la Administracion de Correos de esta ciudad; Bartolo A. Monge, Administrador del Timbre y Francisco Parente, escribiente de este Juzgado, contra el acto del C. Administrador de Rentas de esta capital, que exigió á los referidos el pago de una contribucion sobre los sueldos que disfrutaban como empleados de la Federacion, y cuyo impuesto fué establecido por decreto de la Legislatura del Estado de 31 de Julio de 1872, y cuyos productos fueron consignados á los fondos municipales por diverso decreto de la misma Legislatura de 2 de Agosto de 1874, creyendo con esto, violadas en sus personas las garantías que otorgan los arts. 4, 5 y 27 de la Constitucion general; vistas las constancias de autos, el informe del C. Promotor y todo cuanto mas convino, y

Considerando: 1º Que los empleados que han promovido este juicio, hacen consistir la violacion de las garantías invocadas, en que el acto reclamado envuelve una invasion de facultades exclusivas del Poder federal, puesto que la contribucion que se cobra á los quejosos, disminuye las dotaciones que la ley de presupuestos señala á los empleados que respectivamente desempeñan, sin que para el efecto de la existencia de esta usurpacion, importe la cuantía de la cantidad en que son disminuidas aquellas dotaciones. Que en el informe rendido por el C. Administrador, se confiesa el hecho, y para justificarlo se aduce la disposicion de la fraccion 2ª del art. 31 de la misma Constitucion general, que impone á los mexicanos la obligacion de contribuir para los gastos públicos de la federacion, del Estado y Municipio en que residan, y creyendo á los quejosos comprendidos en esa obligacion por aquella calidad.

2º Que los Gobiernos de los Estados no tienen facultad para imponer contribucio-

nes que graven directamente los sueldos de los empleados de la Federacion que residen en ellos, porque la fraccion 11ª del art. 72 de la Constitucion, declara que es facultad exclusiva del Congreso de la Union, aumentar ó disminuir aquellos; y es evidente que cualquiera contribucion que se les imponga, importa una disminucion y que por lo mismo la autoridad ó empleado del Estado que la exija, usurpa facultades de la esfera federal.

3º Que la obligacion impuesta en la fraccion 2ª del art. 31 citado, es á los mexicanos y no á los empleados; y estos con aquel carácter contribuyen, lo mismo que todos, para los gastos públicos, ya con los impuestos indirectos que forman la mayor parte de la Hacienda del Estado, ya con los directos que gravan la propiedad rústica y urbana y con el llamado escencion de guardia nacional. Pero aun suponiendo que esa obligacion fuera extensiva á los empleados en general, la fraccion 11ª del art. 72 establece una excepcion en favor de los de la Federacion.

4º Que de lo dicho resulta, que si bien ha estado en las facultades del Congreso del Estado expedir los decretos de 31 de Julio de 72 y 2 de Agosto de 74, y comprender en el 1º los sueldos de sus empleados, tambien lo es que el Legislador no podia ocuparse de los empleados de la federacion, sobre los que no puede ejercer sus facultades legislativas; y por lo mismo, no ha sido sino con abuso de las suyas, como el C. Administrador de Rentas ha comprendido los sueldos de los quejosos en el art. 1º del repetido decreto de 1872. Por lo expuesto y con fundamento del art. 101 de la Constitucion y de la ley de 20 de Enero de 1869, como pide el C. Promotor, y por sus razones y disposiciones legales, en que se apoya, se declara: Que la Justicia de la Union ampara y protege á los CC. Martin Tórcida, Agustin G. Real, Luis García de Leon, Ladislao López Aguado, Francisco Luna, Ladislao Ojeda, Jesus O. Izquierdo,

Bartolo A. Monge y Francisco Parente, contra los actos del C. Administrador de Rentas de esta ciudad, que tienden á hacer extensiva sobre sus sueldos, la contribucion decretada en 31 de Julio de 1872 y 2 de Agosto de 1874, por ser esto contrario á lo prevenido en la fraccion 11ª del art. 72 de la Constitucion federal, y violarse las garantías invocadas por aquellos. Hágaseles saber este fallo, sáquense de él las copias necesarias para los efectos legales, y remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia. Lo decretó en definitiva el C. Juez de Distrito del Estado de Michoacan. Doy fé.—*Gabino Ortiz*.—Una rúbrica.—Ante mí.—*Isidro Aleman*.—Una rúbrica.—Es copia que certifico. Morelia, Febrero 22 de 1875.—*Isidro Aleman*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 20 de 1875.

Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por los CC. Martin Tórcida, Agustin G. Real, Luis Garcia de Leon, Ladislao López Aguado, Bartolo A. Monge y Francisco Parente, contra el Administrador de Rentas de Morelia que les exige el pago de contribuciones por los sueldos que tienen asignados como empleados federales; con cuyo cobro, segun manifiestan los quejosos, se vulneran las garantías que consignan los arts. 4º, 5º y 27 de la Constitucion de la República. Visto el informe de la autoridad, el parecer fiscal, el fallo del inferior, con cuanto mas se tuvo presente y ver convino.

Por sus propios legales fundamentos, se confirma la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito en 16 de Febrero del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á los CC. Martin Tórcida, Agustin G. Real, Luis Garcia de Leon, Ladislao López Aguado, Francisco Luna, Ladislao Ojeda, Jesus O. Izquierdo,

Bartolo A. Monge y Francisco Parente, contra los actos del C. Administrador de Rentas de Morelia, que tienden á hacer extensiva á sus sueldos, la contribucion decretada en 31 de Julio y 2 de Agosto de 1874.

Devuélvanse estas actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias*.—*M. Auza*.—*José Arteaga*.—*Ignacio M. Altamirano*.—*E. Montes*.—*L. Velazquez*.—*M. Zavala*.—*José Garcia Ramirez*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 24 de 1875.—*Enrique Landa*.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de esta capital, por el C. Jesus Fagoaga, contra los procedimientos del Juzgado 5º de lo civil de esta misma ciudad, en el juicio hipotecario que en su contra sigue D. Emigdio Garcia de Leon.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez 2º de Distrito.

El Promotor fiscal dice: en cumplimiento de lo prevenido en auto fecha 13 del corriente, he tomado apuntes en la Secretaría para alegar en el presente recurso de amparo, interpuesto por el C. Jesus Fagoaga, contra los procedimientos del Juez